



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI.
SALA LABORAL**

AUDIENCIA NÚMERO 195

Decisión

Santiago de Cali, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020).

El suscrito Magistrado **CARLOS ALBERTO OLIVER GALE**, en asocio de los magistrados que integran la Sala de Decisión, **MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO** y **LUIS GABRIEL MORENO LOVERA**, se constituyó en audiencia pública y declaró abierto el acto con el fin de dar lectura al siguiente:

AUTO INTERLOCUTORIO N° 095

Aprobado en Acta N° 053

MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS ALBERTO OLIVER GALE

Le corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra los Autos Interlocutorios N° 3789 y N° 3792 del 30 de julio del año 2019, proferidos por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, dentro del proceso Ordinario propuesto por la señora **MARÍA DEL ROCÍO VERGARA** contra la entidad **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**, y como litisconsortes necesarios, la señora **CARLINA CANO PIZARRO** y la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, a través de los cuales el Juzgado decidió, *(i)* respecto del primero, Denegar las peticiones elevadas por el apoderado de la parte actora y, *(ii)* respecto del segundo, Declarar probada la excepción previa de cosa juzgada y, en consecuencia, dar por terminado el proceso, Ordenando el archivo de las diligencias, previa cancelación de su radicación.



ANTECEDENTES

Pretende la señora María Del Rocío Vergara que se Declare que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, a cargo de la entidad Positiva Compañía de Seguros S.A., a partir del día 23 de octubre del año 2006; como consecuencia, se condene a la demandada al reconocimiento y pago del retroactivo de las mesadas causadas a partir de la configuración del derecho declarado, los reajustes de ley y las mesadas adiciones de correspondientes a los meses de junio y diciembre, los servicios asistenciales estipulados que legalmente se desprendan del reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, los intereses moratorios de ley; la indexación o corrección monetaria; Costas y Agencias en derecho.

Admitida la demanda por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, la entidad **Positiva Compañía de Seguros S.A.** (folio 53 y ss.) contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y proponiendo como excepción previa, la que denominó como Cosa Juzgada, indicando que ya existía sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, en la que se declaró que le asistía el derecho a la pensión de sobreviviente a la señora Carlina Cano Pizarro, por el fallecimiento del señor Miguel Ángel Olarte Carvajal.

Por su parte, la vinculada como litisconsorte necesario por activa, señora **Carlina Cano Pizarro** (folio 205 y ss.), contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y presentando demanda de reconvenición (folio 212 y ss.) en contra de la señora María Del Rocío Vergara y de Positiva Compañía de Seguros S.A., solicitando la ratificación de la pensión que le fue concedida, según el proceso ordinario adelantado en el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali.

Finalmente, la entidad vinculada como litisconsorte necesario **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y**



Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP (folio 415 y ss.), dio respuesta a la demanda, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones y proponiendo como excepción previa la que denominó como Falta de Legitimación por pasiva.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, mediante Auto Interlocutorio N° 3789 del 30 de julio del año 2019, resolvió para lo que interesa al recurso, Denegar las peticiones elevadas por el apoderado de la parte actora, relativas a la solicitud de suspensión del proceso, aduciendo que no existe prejudicialidad.

Seguidamente, mediante Auto Interlocutorio N° 3792 del 30 de julio del año 2019 resolvió Declarar probada la excepción previa de cosa juzgada y, en consecuencia, dar por terminado el proceso, Ordenando el archivo de las diligencias, previa cancelación de su radicación, aduciendo que dicho litigio había sido resuelto mediante sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali.

RECURSO QUE SE ESTUDIA

Inconforme con lo resuelto en primera instancia, el apoderado judicial de la demandante, señora **María Del Rocío Vergara**, presentó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio N° 3789, manifestando que considera que, de manera fundada, se encuentran estructurados los presupuestos legales del artículo 161 de la Ley 1564 del año 2012.

Que este proceso se vale de un espurio proceso que cursó en el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, además, que la norma también indica la pertinencia de la prejudicialidad, en virtud de que se avocan a una excepción previa, presentada por parte de la parte vinculada a la litis y por parte de Positiva; por lo cual, se encuentran estructurados los requisitos para declarar la prejudicialidad, en razón a que la presente causa se esta valiendo de



un proceso espurio, que este momento es objeto de ataque a quien lo impetró y a los testigos en esa primera causa.

Posteriormente, el mismo apoderado judicial de la parte demandante, presentó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio N° 3792, manifestando concretamente que no existe en su criterio la cosa juzgada, máxime que la cosa juzgada cuando se encuentran demostrada la identidad de partes, indicando que el proceso desarrollado en el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, fue promovido por la señora Carlina, no por la señora María Del Rocío Vergara, la cual fue vinculada como litisconsorcio necesario, y sobre ese aspecto nada dice la doctrina, en el sentido de si evidentemente se alcanza a estructurar como una parte activa a la hoy demandante.

No es cierto que allí se haya ventilado la pretensión a cargo de la señora María Del Rocío Vergara, dado que la que inició dicho proceso fue la señora Carlina Cano Pizarro, por lo cual, lo que se ventiló allí fue su derecho y no de manera inicial el de la señora María Del Rocío Vergara; y que lo hace remembranza la jueza es un estado de cosas que en su momento tuvo una resolución judicial, pero que es ajena a la que nos ocupa.

Que además se debe tener en cuenta que el proceso que se hace referencia del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali aún goza de legalidad, contra este mismo fue presentado denuncia penal, en virtud de los testigos que se presentaron al proceso.

Por lo anterior, solicita se revoque la decisión proferida por el juzgado de instancia y, en consecuencia, se disponga, avanzar en el trámite judicial que nos ocupa, indicando que, confirmar esta decisión sería dar vía libre a la espuria participación que en su momento inició la señora Carlina Cano Pizarro.

Las partes presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

CONSIDERACIONES



Corresponde a esta Sala decidir respecto de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, mediante el cual se pretende: **(i)** en primera medida, que se revoque la decisión mediante la cual se negó la suspensión del proceso, por la consideración de que existe prejudicialidad y, **(ii)** como segundo, que sea revocada la providencia mediante la cual se declaró como probada la excepción de cosa juzgada, y se continúe con el trámite del presente proceso.

Auto Interlocutorio N° 3789 - Suspensión del Proceso

Con el fin de definir la primera de las situaciones, debemos remitirnos a lo indicado en lo dispuesto en el artículo 161 del Código General del Proceso, por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S. S., específicamente, para el presente caso, su numeral 1°, el cual manifiesta:

“Artículo 161. Suspensión del Proceso. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvencción. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.”

El argumento central de la parte recurrente se encuentra fincado en la manifestación de haberse presentado denuncia penal del día 30 de julio del año 2019, por la presunta conducta punible de falso testimonio, fraude procesal, siendo los presuntos responsables la señora Carlina Cano Pizarro y los testigos que rindieron declaración en el proceso surtido ante el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali.

Ahora pues, para definir la existencia o no de prejudicialidad en el presente proceso, debe estudiarse lo dispuesto en el artículo 162 del Código General del Proceso, el cual manifiesta:



“ARTÍCULO 162. DECRETO DE LA SUSPENSIÓN Y SUS EFECTOS. Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión.

La suspensión a que se refiere el numeral 1 del artículo precedente solo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia.

La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir de la ejecutoria del auto que la decreta.

El curso de los incidentes no se afectará si la suspensión recae únicamente sobre el trámite principal.”

De esta forma, nos encontramos con dos requisitos fundamentales para poder hablar de la existencia de prejudicialidad, los cuales son Primero, la prueba de la existencia del proceso que la determina y Segundo, que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia.

Dicho esto, puede indicarse que, en el presente caso, no existe un proceso previo que sea determinante para la decisión en el proceso que nos ocupa, por lo cual, queda claro que no depende actualmente de ninguna otra decisión judicial, máxime si tenemos en cuenta que lo único que existe actualmente es una denuncia penal, que sea de paso advertir, fue radicada en la misma fecha de la audiencia del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, el 30 de julio del año 2019.

Aunado a esto, debemos tener en cuenta que el proceso penal se encuentra compuesto por dos fases cardinales: la investigación y el juzgamiento, pudiendo concebirse dentro de la primera de ellas una etapa contingente de indagación previa a la formulación de la imputación e igualmente entenderse como parte de la segunda, una preparatoria al juicio oral; todo lo anterior, en desarrollo de la separación de funciones de investigación y juzgamiento.



Es pues la etapa de investigación, por regla general de tipo administrativo y no involucra la judicialización de acto alguno, excepto la intervención del juez de control de garantías para aquellos eventos en la fiscalía interfiere derechos fundamentales del imputado; siendo el fiscal el director y coordinador de esta etapa pre-procesal y controla jurídicamente la labor investigativa de la Policía Judicial, al punto que puede durante la etapa de indagación, suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal, en desarrollo de otro de los principios capitales del modelo acusatorio, tal como el de oportunidad.

Concretamente puede establecerse que la Fase de Indagación Preliminar se inicia con la noticia criminal y tiene por objeto la realización de actividades de investigación para la identificación e individualización de los presuntos autores o partícipes de la conducta, descubrimiento y aseguramiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción; evaluación y cuantificación de los daños causados, asistencia y protección a las víctimas. Las labores previas a la formal investigación están encomendadas a los organismos de Policía Judicial, bajo la dirección del Fiscal, quien agrega valor jurídico a las indagaciones previas a la manera de un asesor, a efectos de coadyuvar en la consolidación de un caso que tenga probabilidad de ser llevado a juicio.

Respecto a este punto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-595 del 21 de octubre del año 1998, MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, manifestó lo siguiente:

“Finalidades de la investigación previa y de la etapa de instrucción

5. La investigación previa es una etapa anterior a la apertura de la instrucción, encaminada a esclarecer los vacíos probatorios que impidan hacer claridad acerca de la existencia del hecho, de la identidad de los infractores o sobre el ejercicio de la acción penal. Se adelanta la investigación previa, igualmente, cuando la Fiscalía no asume inmediatamente la investigación, caso en el que la práctica de las pruebas corresponde a quienes ejercen funciones de policía judicial.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI
SALA LABORAL

Ref. Auto María del Rocío Vergara
Vs UGPP y Positiva
Rad. 012-2014-00091-01

La investigación previa se lleva a cabo cuando existen dudas acerca de los presupuestos necesarios para iniciar el proceso penal. Por lo tanto, su naturaleza es contingente; su ejecución depende de las valoraciones probatorias que realice el funcionario y, en fin, su omisión no constituye violación al debido proceso. Sobre las finalidades perseguidas por la investigación previa consagradas en el artículo 319 del C.P.P., esta corporación estableció lo siguiente:

“La investigación previa como etapa anterior al proceso persigue determinar si hay lugar o no a la acción penal. Se trata de una actuación contingente que no debe realizarse si existe suficiente información para iniciar la acción penal habida cuenta de la tipicidad del hecho, la identificación de sus autores o partícipes y la inexistencia de causales de justificación o inculpabilidad. El objeto de la investigación en esta fase previa al proceso consiste en asegurar las fuentes de prueba y ‘adelantar las medidas necesarias tendientes a determinar si ha tenido ocurrencia el hecho que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades; si está descrito en la ley penal como punible; la procedibilidad de la acción penal; practicar y recaudar las pruebas indispensables en relación con la identidad de los autores o partícipes del hecho y su responsabilidad’ (C. de P.P art. 319).

La razón de ser de la investigación previa es la de establecer los presupuestos mínimos para adelantar la acción penal y dar curso a la iniciación formal del proceso. La simple "notitia criminis" no se considera motivo suficiente para iniciar el proceso penal - y poner en marcha la función investigativa y punitiva del Estado - sino se acompaña de las pruebas sobre los presupuestos necesarios de la acción penal - tipicidad del hecho, identificación de autores o partícipes, procedibilidad de la acción - que permitan racionalmente colegir en principio su necesidad. El legislador ha rechazado el automático ejercicio de la acción penal que solía conducir, con grave olvido del principio de efectividad (C. de P.P. art. 9), a la mala utilización de los recursos del Estado para administrar justicia y cuya escasez justamente aconseja hacer de los mismos un uso apropiado. En ese sentido la investigación previa puede llevar al Fiscal a abstenerse de iniciar la instrucción cuando aparezca que el hecho no ha existido, que la conducta es atípica, que la acción penal no puede instaurarse o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o culpabilidad (C. de P.P. art. 327)”.

*Durante la investigación previa se deben garantizar los derechos fundamentales como el debido proceso y en especial el derecho de contradicción. A través de este último, el sindicado de un delito goza de la posibilidad de pronunciarse sobre el valor, el contenido y los elementos del material recaudado para así lograr sustentar la argumentación de la defensa. Esta garantía no está condicionada a la existencia de proceso. En la etapa pre-procesal, se aplica plenamente el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que el sindicado tiene derecho a “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”. Así lo entendió esta Corporación, cuando declaró la inexequibilidad de unas normas que restringían este derecho durante la investigación previa: “Aunque la etapa de la investigación previa es anterior a la existencia del proceso y tiene como finalidad establecer si la investigación debe proseguir o no, es considerada como especial y básica de la instrucción y del juicio. Por tal motivo, no asiste razón que permita la limitación de la controversia probatoria en dicha etapa. Por tanto el principio del debido proceso debe aplicarse en **toda** actuación judicial”.*

De otro lado, en principio la prueba que se decreta durante la investigación previa debe cumplir con los mismos requisitos que se exigen en la etapa de instrucción. En otras palabras, la prueba debe ser decretada mediante providencia y debe cumplir con ciertas formalidades necesarias para su existencia y validez jurídica. La exigencia de providencia que ordene la práctica de las pruebas en las etapas procesales, es un presupuesto necesario de la controversia y publicidad de la prueba.



6. La investigación previa finaliza con la resolución de apertura de investigación o resolución inhibitoria que dicte el fiscal o la unidad de fiscalía. La investigación no puede culminar si no se ha determinado la existencia de un imputado; por tal razón el término de duración de esta etapa pre-procesal varía, ya que sólo en caso de conocerse el imputado la ley (art. 41 de la Ley 81/93), le fija un término máximo de dos meses.”

Lo anterior resulta suficiente para concluir que no se cumple con el primero de los requisitos mencionados anteriormente para concretar la existencia de la prejudicialidad, por cuanto sólo se encuentra surtiéndose actualmente la etapa de indagación para determinar la existencia de un delito y sus autores y partícipes, sin que exista vinculación al proceso.

Siendo de esta forma, se estudia el segundo de los requisitos, cual es que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia, por lo cual debe indicarse, desde ya, que resulta improcedente que se pretenda la suspensión del proceso bajo estudio, cuando el mismo no se encuentra en estado de dictar sentencia de segunda instancia y tampoco se trata de un proceso de única instancia.

Así las cosas, al establecerse que no se dan los presupuestos para decretar la suspensión del proceso, la consecuencia lógica del caso es la confirmación del auto apelado.

Auto Interlocutorio N° 3792 - Cosa Juzgada

Frente a la excepción de Cosa Juzgada propuesta por parte de la demandada, debe la Sala indicar que, en el presente caso, para la juzgadora de primera instancia, se cumplieron los requisitos para declarar probada dicha excepción, razón por la cual debemos remitirnos al artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable al proceso laboral por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S. S., el cual regula la institución de la cosa juzgada, indicando al respecto:



Ref. Auto María del Rocío Vergara
Vs UGPP y Positiva
Rad. 012-2014-00091-01

“Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”

Busca la cosa juzgada en últimas garantizar la seguridad jurídica en las diversas relaciones de derecho, ya que, de no contarse con tal institución, se tornarían los procesos judiciales interminables, y sean instaurados tantas veces como se quiera, que es precisamente lo que busca asegurar esta institución.

Para que se estructure la cosa juzgada es preciso acudir al fenómeno de las identidades procesales, esto es, que entre el primer proceso y el segundo exista la misma causa petendi, es decir, que se refiera a los mismo hechos, sin importar las variaciones sutiles que se puedan presentar entre los mismos; que exista identidad de objeto, o sea, referirse a las mismas pretensiones, mirando al respecto la materialidad y la juridicidad de las mismas, y finalmente que exista identidad de partes, la cual debe tener el carácter de jurídico, comprendiendo no solamente a las primigenias, sino a cualquier causahabiente del derecho debatido.

Partimos de la base en la cosa juzgada, por regla general, de que exista una sentencia o cualquier otra providencia ejecutoriada que dio por finalizado un proceso con tal carácter, y se inicie otro proceso con las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa.

Caso Concreto



Decantado lo anterior, debe reiterar la Sala que, en el presente caso, la pretensión de la demanda es, en forma concreta, el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente, en favor de la señora María Del Rocío Vergara, por el fallecimiento del señor Miguel Ángel Olarte Carvajal, a partir del 23 de octubre del año 2006, prestación a cargo de Positiva Compañía de Seguros S.A., junto con su retroactivo, mesadas adicionales e intereses moratorios.

Ahora, si revisamos la documentación anexa, puede verse como prueba trasladada la totalidad del expediente con radicación 76001-31-05-013-2011-00407-00 (folios 227 a 413), proveniente del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, siendo la parte demandante la señora Carlina Cano Pizarro y los demandados el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y Positiva Compañía de Seguros S.A.

En dicho proceso se pretendía de parte de las entidades demandadas, el reconocimiento y pago de la pensión de una pensión de sobrevivientes en favor de la señora Carlina Cano Pizarro, en calidad de compañera permanente del señor Miguel Ángel Olarte Carvajal, inicialmente en un 50%, por contar el causante con hijas menores de edad, hasta que aquellas cumplieran la mayoría de edad o 25 años, si seguían estudiando, y posteriormente en un 100%, retroactivo al 4 de junio del año 2008, junto con la indexación e intereses moratorios.

La referida demanda fue admitida por parte del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, mediante Auto Interlocutorio N° 2688 del 29 de julio del año 2011, ordenando la notificación al Instituto de Seguros Sociales y a Positiva Compañía de Seguros S.A.

Posteriormente, el proceso fue remitido al Juzgado Trece Laboral Adjunto del Circuito de Cali, el cual asumió el conocimiento del proceso mediante Auto N° A608 del 4 de octubre del año 2011 y mediante Auto



Ref. Auto María del Rocío Vergara
Vs UGPP y Positiva
Rad. 012-2014-00091-01

Interlocutorio N° A425 del la misma fecha, para lo que interesa al caso, dispuso Integrar a la señora María Del Rocío Vergara como litisconsorte necesario por pasiva, indicando que esta se presentó ante Positiva Compañía de Seguros S.A. a reclamar pensión de sobreviviente, ordenando la notificación a esta.

Mediante escrito del 6 de diciembre del año 2011, la apoderada judicial de la señora Carlina Cano Pizarro, indicó en su momento que la dirección a la que fue remitida la comunicación a la señora María Del Rocío Vergara, fue la aportada por Positiva, dada por aquella, pero que en esta dirección es “DESCONOCIDA” y que ni la demandante ni la apoderada tienen conocimiento de su domicilio actual, por solicitando la notificación por edicto.

Mediante Auto N° 358 del 8 de febrero del año 2012, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali dispone asumir nuevamente el conocimiento del proceso, ordenando el emplazamiento de la señora María Del Rocío Vergara, efectuando el correspondiente nombramiento de curador ad-litem.

Mediante escrito del 21 de febrero del año 2012, la apoderada de la señora Carlina Cano Pizarro aportó copia de la publicación del edicto emplazatorio.

Posteriormente, mediante escrito del 9 de abril del año 2012, el curador de la señora María Del Rocío Vergara contestó la demanda, contestación que fue inadmitida mediante Auto Interlocutorio N° 985 del 11 de mayo del año 2012 y, una vez subsanadas las falencias, se dispuso por parte del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali la admisión de la contestación, mediante Auto N° 1096 del 30 de mayo del año 2012

Surtidas las etapas procesales pertinentes, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali emite Sentencia N° 58 del 30 de Julio del año 2012, mediante la cual resuelve Declarar no probadas las excepciones propuestas; Declarar que la señora, en su calidad de compañera permanente supérstite, es beneficiaria vitalicia en un 50% de la pensión mínima de



Ref. Auto María del Rocío Vergara
Vs UGPP y Positiva
Rad. 012-2014-00091-01

sobreviviente del señor Miguel Ángel Olarte Carvajal; Condenar a Positiva Compañía de Seguros S.A., como administradora de riegos profesionales, a pagar a la señora Carlina Cano Pizarro, la suma de \$19'741.270 Pesos, porción pensional del 50% del SMLMV, correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de octubre del año 2006 y el 30 de junio del año 2012; Condenar a Positiva Compañía de Seguros S.A., como administradora de riegos profesionales, a continuar pagando mensualmente y en forma vitalicia, a la señora Carlina Cano Pizarro, en los porcentajes ya estipulados, el 50% de la pensión mínima de sobrevivientes; a partir del 1 de julio del año 2012, sin perjuicio del acrecimiento de la mesada pensional cuando desaparezca el derecho de la última de las hijas beneficiarias del causante Miguel Ángel Olarte Carvajal, evento en el cual le corresponderá el 100%; Condenar a Positiva Compañía de Seguros S.A., como administradora de riegos profesionales, a pagar a la señora Carlina Cano Pizarro, los intereses de mora sobre sus respectivas mesadas retroactivas, conforme lo dispuesto por el artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde su causación 23 de octubre del año 2006 hasta el momento de su pago; Absolver a Positiva Compañía de Seguros S.A., como administradora de riegos profesionales, de cualquier obligación pensional respecto de la señora María Del Rocío Vergara; Condenar en costas a la demandada Positiva Compañía de Seguros S.A., a favor de la demandante Carlina Cano Pizarro, agencias en derecho se fijan en 3 SMLMV.

Finalmente, Mediante Auto Interlocutorio N° 1712 de la misma fecha, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali dispone Declarar en firme la referida sentencia, dado que no fue recurrida.

Conforme lo manifestado, queda claro que entre el proceso surtido ante el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali y el que hoy nos convoca, se configuran la totalidad de las identidades procesales, toda vez que existen la misma causa petendi, la misma identidad de objeto y la misma identidad de partes, empero, en sentir de la Sala, dicha providencia no se encuentra ejecutoriada por cuanto debió surtirse el grado de competencia funcional de consulta respecto a la señora MARÍA DEL ROCÍO VERGARA, puesto que la sentencia le fue adversa en forma total.



De acuerdo con el artículo 303 del Código General del Proceso la sentencia del primer proceso tiene que estar ejecutoriada para que haga tránsito a cosa juzgada. Por su parte, el artículo 302 de la misma obra señala que las providencias quedan ejecutoriada una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.

El artículo 331 del Código de Procedimiento Civil vigente al momento en que se emitió la sentencia del Juzgado Trece Laboral del Circuito también señalaba expresamente que *“Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta”*

Esta normatividad anteriormente citada es aplicable en materia laboral y de seguridad social por vía de remisión del artículo 145 del CPTSS, en la medida en que existe vacío en nuestra normatividad.

Por otro lado, el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007 modificó el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social precisando que *“Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo tribunal si no fueren apeladas”*

Si bien, anterior a la Ley 1149 de 2007 solamente hablaba de sentencias totalmente adversas al trabajador para que procediera la consulta, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a los procesos iniciados con anterioridad a dicha normatividad consideró que debían incluirse las sentencias adversas a los pensionados, afiliados o beneficiarios de la Seguridad Social, dado el carácter irrenunciable de la seguridad social.¹

¹ Sentencias de 21 de noviembre de 2007, radicación No 30667, reiterada en sentencia de 5 de noviembre de 2007 y en sentencia de tutela de 10 de agosto de 2010, radicación No 29241.



Ref. Auto María del Rocío Vergara
Vs UGPP y Positiva
Rad. 012-2014-00091-01

Puesta, así las cosas, se revocará la providencia apelada y en su lugar, se declarará no probada la excepción de cosa juzgada. Se ordenará a la jueza de primera instancia continuar con el trámite del proceso.

Por Secretaría y por el a quo, infórmese de esta determinación al Juez Trece Laboral del Circuito de Cali para que tome la decisión correspondiente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Interlocutorio N° 3789 del 30 de julio del año 2019, proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, conforme las consideraciones de la presente providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el Auto Interlocutorio N° 3792 del 30 de julio del año 2019, proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, y en su lugar, se **DECLARA** no probada la excepción previa de cosa juzgada.

TERCERO: Como consecuencia del numeral anterior, se dispone que la jueza de primera instancia continúe con el trámite del proceso.

CUARTO: Por Secretaría y por el a quo, REMÍTASE copia de esta providencia al Juez Trece Laboral del Circuito de Cali para que tome la decisión correspondiente dentro del proceso radicación 76001-31-05-013-2011-00407-00, demandante la señora Carlina Cano Pizarro y los demandados el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y Positiva Compañía de Seguros S.A.; vinculada MARÍA DEL ROCÍO VERGARA.

QUINTO: Sin COSTAS en instancia por no haberse causado.




Ref. Auto María del Rocío Vergara
Vs UGPP y Positiva
Rad. 012-2014-00091-01

SEXTO: DEVUÉLVASE el presente expediente al juzgado de origen, Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE POR ESTADO VIRTUAL

Se firma por los magistrados integrantes de la sala,



CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ



Art. 11 Dec. 491/28-03-2020
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO



LUIS GABRIEL MORENO LOVERA

Firmado Por:

CARLOS ALBERTO OLIVER GALE
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
Despacho 005 De La Sala Laboral Del Tribunal Superior De Cali

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

bba3a2420243a959709991504ca389ba4da57e62019a31cb473a5ef7fa2cfe15

Documento generado en 21/09/2020 12:54:31 p.m.